

Cesión a Hacienda de datos de pacientes. Informe 0025/2005

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación a la Administración tributaria de un listado de pacientes a los que se presta atención ambulatoria por los facultativos integrados en la Administración consultante, a fin de que a través del mismo quede justificado el hecho de los desplazamientos efectuados, a efectos fiscales.

La transmisión de los datos así planteada constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Respecto de las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, será posible la comunicación cuando la misma se encuentre amparada en una norma con rango de Ley, tal y como dispone el artículo 11.2 a) de la propia Ley Orgánica.

Al propio tiempo, debe señalarse que, dado que los datos objeto de la comunicación se referirán a pacientes respecto de los cuales se prestará una actividad relacionada con la asistencia sanitaria, el hecho mismo de su inclusión en el listado implicaría una cesión de datos relacionados con la salud de estas personas.

En este sentido, debe recordarse que si bien la LOPD se refiere expresamente a los datos de salud, considerándolos especialmente protegidos y limitando la posibilidad de su recopilación y cesión, dicha norma no establece un concepto concreto de este tipo de datos.

No obstante, el concepto de datos relacionados con la salud de los individuos debe tomar en consideración lo establecido en los distintos instrumentos internacionales referidos al tratamiento de estos datos.

En particular, ha de tenerse en cuenta lo señalado en el apartado 45 de la Memoria Explicativa del Convenio 108 del Consejo de Europa, que define los “datos de carácter personal relativos a la salud”, indicando que su concepto abarca “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo”, pudiendo tratarse de informaciones sobre un individuo de buena salud, enfermo o fallecido”, añadiendo que “debe entenderse que estos datos comprenden igualmente las informaciones relativas al abuso del alcohol o al consumo de drogas”.

Del mismo modo, la Recomendación 5/97, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, referente a la protección de datos médicos afirma que “la expresión datos médicos hace referencia a todos los datos de carácter personal relativos a la salud de una persona. Afecta igualmente a los datos manifiesta y estrechamente relacionados con la salud, así como con las informaciones genéticas”.

Pues bien, respecto de los datos de salud, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 es terminante al señalar que “Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

Dicho lo anterior, el artículo 93.1 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, dispone que “las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas”.

Al propio tiempo, el artículo 94.1 añade que “las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones”.

De los preceptos transcritos se desprende la existencia de un deber de colaboración con la Administración Tributaria, que implicará, la comunicación de los datos que revistan trascendencia tributaria y sean necesarios para el ejercicio por dicha Administración de las potestades que la Ley le atribuye.

No obstante, como cabe apreciar de los citados preceptos, la información que habrá de facilitarse será necesariamente la que revista “trascendencia tributaria”, por ser ésta la precisa para el ejercicio de dichas potestades. En este sentido, los preceptos deben cohonestarse con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

De ello se desprende que los datos que habrán de facilitarse deberán ser los que resulten “adecuados, pertinentes y no excesivos” en relación con el ejercicio de las potestades tributarias y, en el supuesto que nos ocupa los que cumplan tal condición en relación con la necesidad de justificar el concepto de “gastos de desplazamiento” que pretende otorgarse a los relacionados con el concepto “dispersión geográfica” al que se refiere la consulta.

Por este motivo, debe considerarse que la inclusión en la información solicitada de los datos identificativos de los pacientes objeto de atención sanitaria, que implica la concurrencia de un dato relacionado con la salud de los mismos, resulta excesiva en relación con la finalidad que justificaría la cesión de los datos, toda vez que el dato de trascendencia tributaria será el hecho mismo del desplazamiento, pero no la identificación del paciente atendido.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que no sería conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 la comunicación de los datos identificativos de los pacientes visitados, si bien, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 94.1 de la Ley General Tributaria, que habilita la cesión de datos con “trascendencia tributaria” a la Administración tributaria, sí sería lícita la comunicación de los datos referidos a los desplazamientos efectuados, con la indicación de la naturaleza de los gastos derivados de dichos traslados.

Al propio tiempo, el dato del domicilio concreto en el que se produce la visita únicamente resultaría adecuado a la finalidad tributaria perseguida en caso de que para la determinación del gasto de locomoción fuera precisa la indicación de dicho domicilio completo. De este modo, si fuera suficiente la indicación de la localidad o del domicilio por referencia a la calle o plaza en la que se realiza la consulta, debería suministrarse únicamente dicho dato.

En resumen, a juicio de esta Agencia, podría darse cumplimiento al requerimiento solicitado mediante la certificación de los desplazamientos efectuados, indicando si ello fuera necesario el domicilio en que se produce la asistencia sanitaria, pero sin hacer mención en ningún caso de los datos identificativos del paciente visitado, por suponer dicha referencia una extralimitación de lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, en relación con el artículo 94.1 de la Ley General Tributaria, que hace únicamente referencia a los datos que revistan “trascendencia tributaria”.